

Lucha social y popular en los diálogos de paz

El establecimiento de una mesa de diálogos entre la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos se ha convertido en el punto central de la discusión política. Entre tan diversas posturas, surge con fuerza la pregunta por cuáles son las diferencias sustanciales entre este y otros intentos en la búsqueda dialogada de la paz. Hasta el momento, las respuestas han oscilado entorno a la capacidad militar de las organizaciones en contienda en la confrontación armada, el carácter y viabilidad de la institucionalidad que ha venido creando el gobierno de Santos de cara a los diálogos o la valoración sobre el momento económico en el país.

**Sandra
Carolina Bautista**

Economista
Magíster en
Estudios Políticos
Docente universitaria

Un elemento fundamental no ha sido incorporado suficientemente en la discusión, siendo cardinal para ubicar particularidades de este nuevo momento de diálogos de paz, a saber, la dinámica de lucha social y popular, que da un cariz distinto a las conversaciones de paz a desarrollarse en La Habana y en Oslo. No es este un aspecto de mero contexto, sino que por el contrario puede jugar un papel determinante en el inicio y desarrollo de los diálogos, tal y como ha ocurrido con varias experiencias en Nuestra América Latina.



Jairo Calvo (Ernesto Rojas), John Agudelo Ríos, Oscar William Calvo y Bernardo Gutiérrez, durante la firma de los acuerdos de cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el EPL, 24 de agosto de 1984.
Imagen de: <http://oscarwilliamcalvo.blogspot.com/2004/09/los-hombres-de-paz-y-de-guerra.html>

1. El momento de lucha popular

La dinámica de lucha social y popular en el país es un elemento que marca amplias diferencias con el proceso de diálogo del Caguán, realizado entre 1999 y 2002. Mientras que a finales de los noventa la conclusión generalizada sobre los movimientos sociales era la aguda crisis por la que atravesaban, en los albores de la década del diez del siglo XXI se hace evidente un proceso de recomposición y fortalecimiento de la lucha social, que, aunque no es homogéneo, sí permite discutir la trascendencia que puede tener en una dinámica de diálogos por la paz con justicia social.

Según Mauricio Archila¹, al iniciar el siglo XXI los actores colectivos se caracterizaban por un precario papel en transformaciones de fondo, un alto grado de dispersión en las luchas, con primacía de las demandas particulares, organizaciones poco representativas, con escasos mecanismos de coordinación y que, a lo sumo, participaban en convergencias temporales determinadas por factores políticos y económicos externos, dejando como gran resultado la inexistencia de movimientos sociales fuertes.

Diez años después, algunos de estos problemas persisten, pero varios elementos evidencian una dinámica de cambio, reconociendo también que se trata de un proceso lento, desigual y aún en curso. Desde lo cuantitativo y según datos del Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP, el número de acciones de protesta se ha incrementado lo largo de los últimos quince años, pasando de menos de quinientas en 1998 a poco más de ochocientas en 2010, con dos picos

1 Mauricio Archila. "Colombia en el cambio de siglo: actores sociales, guerra y política. En: *Revista Nueva Sociedad*, No. 182

importantes en 1999 y 2007, este último con el mayor número de eventos. Si bien no se cuenta aún con el dato para 2011, es evidente que continúa el ascenso, observable en la dinámica del movimiento estudiantil, las luchas por el territorio protagonizadas por indígenas y campesinos, por transporte público digno en algunas de las principales ciudades, o por condiciones de trabajo encabezadas por trabajadores del sector minero energético.

Más allá de lo cuantitativo, otros elementos de orden orgánico, programático y relativos a los repertorios de confrontación, dejan claro que algunos de los movimientos sociales colombianos se encuentran en proceso de fortalecimiento. Lo primero tiene que ver con la cualificación en la capacidad de movilización y confrontación, observable por el sostenimiento de las acciones colectivas a lo largo del tiempo, con casos regionales, como la lucha de los trabajadores del sector minero energético o las tomas a entidades a nivel local. Como segundo elemento, el sostenimiento de tales acciones permite el fortalecimiento de la unidad de acción y la construcción programática, tal y como ha ocurrido con varios sectores del movimiento campesino e indígena que han avanzado en elaboraciones como las Zonas de Reserva Campesina o en la conceptualización del territorio y lo territorial.

Una tercera consideración está en la construcción de referentes unitarios a partir de procesos regionales y de base, tanto sectorial, como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, en el movimiento estudiantil universitario, como en convergencias de organizaciones sociales y populares en torno a proyectos políticos colectivos, como el Congreso de los Pueblos o la Marcha Patriótica. Particularmente estos dos últimos procesos reabren el debate sobre la relación entre lo político y lo social en los movimientos sociales en Colombia, en tanto proponen la construcción del poder político como un proceso que, si bien converge hacia lo estatal, se sustenta en la reivindicación social y en la capacidad de las organizaciones y comunidades para tomar decisiones, distanciándose así de las concepciones que restringen lo político a lo institucional formal.

Un elemento fundamental no ha sido incorporado suficientemente en la discusión, siendo cardinal para ubicar particularidades de este nuevo momento de diálogos de paz, a saber, la dinámica de lucha social y popular, que da un cariz distinto a las conversaciones de paz a desarrollarse en La Habana y en Oslo. No es este un aspecto de mero contexto, sino que por el contrario puede jugar un papel determinante en el inicio y desarrollo de los diálogos, tal y como ha ocurrido con varias experiencias en Nuestra América Latina.



El movimiento estudiantil universitario es el caso más representativo en la recomposición de los movimientos sociales. Desde 2005 propuso un repertorio de acción colectiva con un claro protagonismo del paro de actividades académicas, y a partir de una base organizativa, reconstruida desde finales de los noventa, logra pasar de acciones locales sostenidas a una fuerte articulación y coordinación a través de la MANE, con la definición de un programa mínimo asumido a nivel nacional que permite desarrollar el emblemático paro de 2011, cuya duración y contundencia significó un punto de inflexión en la construcción de este actor colectivo.

2. Paz con justicia social en la agenda social y popular

Los analistas de movimientos sociales han creado la categoría “movimiento por la paz”, constituido por un conjunto de acciones colectivas motivadas en la búsqueda de la paz, la defensa de la vida y el rechazo a la violencia, catalogándolas a su vez como las más importantes de los años noventa en Colombia². Siendo evidente la amplia movilización social en torno a estos temas, vale la pena abrir el debate sobre el significado de la paz como un campo en disputa, pues las expresiones a favor de la paz y en contra del conflicto, lejos de constituir una dinámica homogénea, son expresiones de las diversas formas de entender la dinámica de violencia en el país.

Las organizaciones sociales y populares constituyen el sujeto colectivo más persistente en la lucha por la paz, tanto desde lo sectorial como lo regional. Esto resulta lógico al observar casos de recrudescimiento de la confrontación armada, como Antioquía, Magdalena Medio, Cauca, Arauca o Chocó. Pero, una mirada a las reivindicaciones planteadas permite ubicar que la búsqueda de la paz no es un punto más en la agenda, propuesto de manera paralela al conjunto de exigencias. Es, por el contrario, un elemento orgánico en la construcción reivindicativa, articulador de los diferentes aspectos contenidos en propuestas programáticas, transversal a las mismas y que da cuenta de la comprensión de la confrontación armada como parte del desarrollo de sendos conflictos económicos, sociales, políticos, ambientales y culturales en el país.

² Mauricio García (2006) “Paz en el territorio: dinámica de expansión geográfica del accionar colectivo por la paz en Colombia 1978-2003”. En *Revista Territorios No 15*, pp. 9-32

Enunciando algunos ejemplos encontramos que el Mandato Agrario, documento programático resultado del Congreso Agrario de 2003, plantea la vinculación entre lógicas de las empresas nacionales y multinacionales, desplazamiento forzado, la política de Seguridad Democrática y la política económica del entonces presidente Álvaro Uribe. De igual manera, la movilización Agraria y Popular de octubre de 2007, propuso una fuerte articulación entre aumento del presupuesto de guerra y deterioro de derechos como salud y educación. Recientemente, tanto el Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrodescendientes e Indígenas por la Tierra y la Paz de Colombia, como el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, celebrados en 2011, dejaron claro en sus conclusiones una perspectiva de conflicto que denota un carácter multidimensional, donde lo social, lo económico y lo político sustentan y retroalimentan las dinámicas de confrontación armada. En ese mismo sentido, la consigna central de la MANE, “por una nueva educación para un país con soberanía, democracia y paz”, en su proceso de discusión a lo largo de 2011, permite ver la concepción articuladora entre conflicto armado y conflicto social, político y económico.

La comprensión del conflicto en diversas dinámicas interrelacionadas conduce también a una perspectiva de paz con justicia social que las organizaciones sociales y populares ponen en juego en cada evento de protesta y en sus repertorios de acción colectiva. Es así como a la luz de los diálogos que apenas inician entre la insurgencia y el gobierno de Santos, el aporte sustancial del movimiento social y popular estará en el acumulado de construcción reivindicativa y programática, así como de esas concepciones de conflicto y paz fundadas en la realidad local y cristalizadas en acuerdos, pronunciamientos y propuestas de corte nacional, como la ley



Leonardo Posada Representante a la Cámara por la UP, asesinado en Barrancabermeja el 30 de agosto de 1986. Imagen de: http://www.semana.com/fotos/%5C1582%5CimgArticulo_T1_117673_2012824_212018.jpg



alternativa de tierras o la ley alternativa de educación superior que se encuentra en construcción.

Mediante el ejercicio reivindicativo, la generación de propuesta y la movilización, las organizaciones sociales y populares pueden hoy entrar con fuerza en un proceso de diálogo por la paz, poniendo en juego las lecturas construidas y alimentando la agenda de discusión ya establecida para el escenario de Oslo. No puede ser esta un espacio cerrado, cuando los temas a tratar son de interés nacional, por lo que el logro de esta apertura se constituye en la primera tarea del movimiento social.

3. Enseñanza del caso salvadoreño

Los conceptos de conflicto y paz constituyen un campo en disputa frente a la apuesta que hoy realiza el bloque hegemónico en el poder, evidente en construcciones como el Marco Jurídico para la Paz, tendiente a tocar de manera exclusiva la desmovilización y las garantías políticas. Este hecho invita a revisar una enseñanza del proceso de paz en El Salvador, la cual, guardadas proporciones, constituye un valioso aprendizaje para el caso colombiano.

Este país centroamericano vivió un dramático estado de guerra a lo largo de los años ochenta que culminó con la firma del Acuerdo de Paz de 1991, logrado entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de derecha de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, en el cual jugó un papel fundamental la movilización social y popular, encabezada particularmente por las principales centrales sindicales.

El proceso estuvo rodeado por la sociedad salvadoreña mediante convergencias de corte social y popular. En tal sentido, en 1987 surge el Comité Permanente para el Debate Nacional por la Paz, CPDN, amplio espacio que generó la agenda social para los diálogos de paz, haciendo énfasis en las causas sociales, económicas y políticas de la confrontación armada, pero que no tuvo participación en la mesa de diálogos. Tal ausencia generó la gran deuda social y económica que hoy todavía padece El Salvador, gracias a la imposición del neoliberalismo. El efectivo logro de mayores garantías políticas fue estrangulado por la regresiva agenda económica del posconflicto, hecho derivado de la no incorporación de las propuestas del movimiento social y popular.

Tal dinámica de exclusión social creciente en El Salvador, convertida hoy en bomba de tiempo, deja como moraleja la trascendencia de la participación social y popular en los diálogos de paz, toda vez que la agenda construida desde esta orilla es la base irremplazable de la paz duradera, la paz con justicia social. 